

esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese; y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias-M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez M. Zivala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar*, Secretario.

Es copia que certifico México, Febrero 24 de 1875.—*Enrique Landa*.

AMPARO

Interpuesto ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por el C. Pascual Carballada, contra el Ministro de la Guerra, por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez 2º de Distrito:

El promotor fiscal dice: Que sublevado el ex-convento de Jesus Maria por órden suprema en diversas fracciones, y aprobados que fueron los planos parentales de cada una de las fracciones, se adjudicó el lote núm. 1 al C. Pascual Carballada, como consta de la escritura de adjudicacion fecha 23 de Diciembre de 1861, que en copia autorizada corre en este expediente de fojas 8 á la 17.

Contrajo el adjudicatario la obligacion de reconocer el valor respectivo de su posesion, al seis por ciento anual, aplicándose este rédito al sostenimiento del hospital de San Pablo, hoy llamado de sangre.

Todos los actos referidos fueron desde su origen practicados con total arreglo á las leyes, y en virtud de ellos, adquirió dere-

chos y dominio pleno en ese lote, el referido adjudicatario.

Así se hallaba, hasta el 29 de Diciembre de 1871, que el supremo gobierno, investido por la ley del dia 2 del mismo mes y año, de facultades extraordinarias, destinó el lote núm. 1 referido para cuartel, alojándose en él, uno de los batallones del ejército.

Tal ocupacion que aun subsiste, es la que ha dado origen al presente recurso de amparo, interpuesto por el quejoso, y trayendo en apoyo de su intercesion las prevenciones expresas terminantes, y que no admiten interpretacion, de los arts. 16 y 27 de la Constitucion, que aseguran á los ciudadanos y habitantes de la República, el 1º de los citados, que nadie puede ser molestado en su persona y posesiones, si no es de la manera que en dicho artículo se dispone; y el 2º, que nadie puede ser privado de su propiedad, si no es por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

La excepcion que se alega por la autoridad responsable del acto que se reclama, se funda en la ley de 2 de Diciembre de 1871, de facultades extraordinarias. El texto de esta ley dice: "La propiedad de las personas puede ser ocupada sin su consentimiento, por causa de utilidad pública, en caso de urgente necesidad, y con la competente indemnizacion, previa ó posterior, que se hará efectiva de preferencia en este segundo caso."

Muy explícita fué la autorizacion que dió la ley al supremo gobierno; pero no menos lo fué la condicion, y *de toda preferencia*, que debia llenar al hacer uso de esa facultad.

Seria por demas enojoso y molesto, el análisis legal del acto reclamado: es clara, es evidente la violacion de las garantías constitucionales que se han citado, y que si bien es disculpable la autoridad que violó esas garantías, atendidas las graves circunstancias que determinaron al legislador, á investir al supremo Poder Ejecutivo con tales facultades, si estas se extralimitaron, no

pueden sancionarse actos que por lo mismo no estuvo jamás en la mente del legislador, que pudieran ejecutarse, pues lejos de esto, definió y circunscribió esas facultades, á lo meramente preciso y del momento.

El promotor que suscribe, adhiriéndose al informe del ciudadano defensor de los bienes de beneficencia, aprobado por el ayuntamiento, y transcrito á este juzgado, en cuyo informe están tratados los puntos de hecho y de derecho con la maestría que acostumbra dilucidar las cuestiones el respetable y entendido letrado que lo suscribe, y dando en esta respuesta fiscal por repetidas las observaciones en dicho informe contenidas, concluye pidiendo á este juzgado se sirva declarar:

Que la Justicia de la Union protege y ampara al C. Pascual Carballeda contra el acto ejecutado por el Ministro de la Guerra, mandando se ocupara para cuartel el lote núm. 1 del ex-convento de Jesus María de la propiedad del quejoso, porque tal acto ha violado las garantías individuales, consignadas en los arts. 16 y 27 de la Constitución y que esta otorga á los ciudadanos y habitantes de la República.

México, Noviembre 15 de 1874.—*J. Biviano Beltran.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Diciembre 30 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Pascual Carballeda contra el Ministro de la Guerra á virtud de reputar violadas en su persona las garantías que otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitución con la retencion que dicha autoridad está efectuando en propiedad del quejoso, cita en el lote núm. 1 del ex-convento de Jesus María; visto el informe del Ministerio, lo pedido por la parte fiscal, lo alegado y documentos presentados por el quejoso; y visto, en fin lo que veerse debía, atendiendo á que la violacion de garantías en el caso se hace

consistir en lo siguiente: que habiendo, adquirido el quejoso legal é irrevocablemente el lote núm. 1 del citado ex-convento, el cual lo fué trasferido el dominio por el ayuntamiento del Distrito con facultades suficientes para ello, como consta del testimonio exhibido é informe de esa corporacion al ocuparse el mencionado lote para cuartel, sin facultades suficientes por parte del Ministerio, ni con los requisitos necesarios á la expropiacion, se ha verificado y continúa verificándose tal acto, en contravencion expresa á los arts. 16 y 27 de la Constitución, y

Considerando: que el quejoso ha comprobado su propiedad al lote núm. 1 del repetido ex-convento no solo con el documento fehaciente de escritura pública, sino también por el informe que ha dado el ayuntamiento de la ciudad; que el Ministerio de la Guerra segun su propio informe tan solo apoya su procedimiento en el acuerdo del C. presidente de la República, fecha 27 de Diciembre de 1871, acusado que aun en el supuesto de su legal expedicion y subsistencia; para otros efectos no podria ser extensiva á la expropiacion sin respectiva indemnizacion, al menos en la actualidad en que han cesado aquellas facultades extraordinarias con que se expidió el repetido acuerdo ó decreto. Por tales consideraciones, pues, y de conformidad con el pedimento fiscal se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Pascual Carballeda contra el acto del Ministerio de la Guerra, por el que detiene en su poder y destinado al servicio militar, el local correspondiente al lote núm. 1 del ex-convento de Jesus María, por violarse con ello las garantías que invoca el quejoso. Hágase, saber publíquese, y prévia citacion del promotor fiscal, elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Lic. José María Canaliza. Doy fé.—*José María Canaliza.*—*Fernando Zamora*, secretario.
Es copia. México, Enero 4 de 1875.—*Fernando Zamora*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Enero 27 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juez 2º de Distrito de esta Capital, por el C. Pascual Carballeda contra el Ministerio de la Guerra, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías que otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitución, con la retención, que dicha autoridad está efectuando en propiedad del quejoso, situada en el lote núm. 1 del Ex convento de Jesus María:

Vista la sentencia del Juez de Distrito, que amparó al quejoso, y las demás constancias que obran en autos:

Considerando: que por el decreto de 6 de Mayo de 1861, el Gobierno general cedió á los bienes de beneficencia pública el convento de Jesus María, y que en consecuencia, se procedió á enagenarlo en lotes de los cuales el marcado con el núm. 1, ha pasado á ser propiedad del quejoso.

Considerando: que siendo ya de propiedad particular el mencionado lote, el Ejecutivo de la Union por su previa orden de 27 de Diciembre de 1871, declaró: que revocaba la cesion hecha á la beneficencia, de la parte del convento de Jesus María, que estaba destinada al alojamiento de la tropa, resolución en la cual se funda el Ministerio de la Guerra para justificar la ocupación del lote núm. 1.

Considerando: que si bien el Gobierno general, tiene y ha tenido facultad para ocupar el local que sirve de cuartel por causa de utilidad pública y previa indemnización no ha estado autorizado ni aún por las leyes de facultades extraordinarias para privar á los particulares de derechos legítimos y anteriormente adquiridos, declarándolos nulos y de ningún valor por disposiciones dadas con posterioridad, cual es la orden de 27 de Diciembre de 1871, y

por consiguiente con infracción del art. 14 de la ley fundamental.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, se decretó: que se de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció el Juez 2º de Distrito de esta Capital, en 30 de Diciembre próximo pasado que dice:

“Que la Justicia de la Union, ampara y protege á D. Pascual Carballeda, contra el acto del Ministerio de la Guerra por el que detiene en su poder, y destinado á servicio militar el local correspondiente al lote núm. 1 del Ex-convento de Jesus María, por violarse con ello las garantías que invoca el quejoso.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José María Iglesias.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzmán.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 9 de 1875.—Luis María Aguilar, secretario.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por los defensores de Manuel Garay, contra la sentencia del Gobernador del Distrito, que condenó á Garay á la pena de muerte.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Enero 27 de 1875.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo, fué promovido por los